



[Mobile App](#) [En Espanol](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [RSS Feed](#)

[Our Work Reports](#) [Regions](#) ([Sub-Saharan Africa](#) [Asia-Pacific](#) [Eurasia](#) [Europe](#) [Middle East and North Africa](#) [Americas](#))
[News](#) [Events](#) [About Us](#) [Donate](#)

[Blog](#) [Press Releases](#) [Initiatives](#) [China Media Bulletin](#) [中国媒体快报](#) [中國媒體快報](#)

[< back to Freedom At Issue Blog](#)

El preocupante retroceso de la libertad de expresión en España

June 29, 2015

By **Ana Pastor,**

Investigadora, Freedom in the World y Freedom of the Press



Tras las elecciones locales Españolas del pasado Mayo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, culpó de la derrota sufrida por su partido, el Partido Popular (PP), al “martilleo constante” de los casos de corrupción que han sacudido al gobierno en los últimos años. Esta inclinación a pensar en las críticas públicas como obstáculos en vez de afrontar los problemas que las subyacen, se ha visto en reflejada en las iniciativas legislativas del gobierno de Rajoy.

El 1 de Julio, la nueva de [Ley de Seguridad Ciudadana](#), apodada como Ley Mordaza, entra en

vigor junto con una reforma del Código Penal. La ley impone sanciones a ofensas relacionadas con protestas y manifestaciones, con penas administrativas catalogadas como leves, graves, o muy graves. Las multas leves, de entre 100 y 600 euros, se aplicarán a manifestaciones en lugares de tránsito público si no han sido comunicadas de antemano. Si esta manifestación se realiza cerca del Congreso u otros edificios del gobierno, la multa será de 30,000 euros, mientras que las penas por manifestaciones cerca de estructuras críticas como estaciones de transporte o centrales nucleares pueden ascender hasta los increíbles 600,000 euros. Negarse a identificarse ante la autoridad, negarse a disolver manifestaciones cuando sea requerido, y el uso no autorizado de imágenes de los cuerpos de seguridad también está sujeto a penas de hasta 30,000 euros. Este último punto pone en riesgo el trabajo de fotoperiodistas y otros profesionales de la comunicación que buscan informar sobre abusos policiales.

La ley limita la libertad de expresión y la libertad de asamblea bajo el pretexto de mantener la seguridad. “Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos,” [explicó el parlamentario del PP, Conrado Escobar.](#)

Cuando se propuso en 2013, fue directamente catalogada como Ley Anti-15M en referencia al movimiento de protesta social que surgió el 15 de Mayo de 2011. Esas protestas se hubieran visto obstaculizadas si esta ley hubiera estado presente. El movimiento empezó de forma espontánea cuando un grupo de personas decidió quedarse a pasar la noche en la Puerta del Sol, la plaza central de Madrid, para protestar por las políticas de austeridad.

La Ley Mordaza supone el culmen a una serie de intentos por parte del gobierno para acallar a los “indignados,” nombre con el que se conoce a los protestantes de Puerta del Sol. En 2012, cuando las organizaciones Plataforma En Pie y Coordinadora 25s convocaron una concentración para “rodear” el Congreso, el ejecutivo llevó a siete de sus convocantes a la Audiencia Nacional. El Juez Santiago Pedraz, sin embargo, avaló a los manifestantes y regañó al gobierno por intentar restringir un derecho fundamental. Posteriormente otros dos jueces hicieron lo propio en similares casos.

En abril de 2013, ante las continuas protestas dirigidas a políticos por ciudadanos afectados por los desahucios a causa de la crisis, el gobierno de Rajoy ordenó a la policía prohibir estas manifestaciones a menos de 300 metros—o tres campos de fútbol—de las casas y oficinas de cargos públicos. Un [alto dirigente del PP calificó las protestas](#) anti-desahucios como “nazismo puro” y “un espíritu totalitario y sectario.”

La última medida contra la libertad de expresión e información del gobierno tuvo lugar a principios de este mes, cuando el Congreso aprobó [una enmienda](#) propuesta por el PP en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La enmienda restringe el uso en los medios de imágenes de detenidos cuando son arrestados. La idea es evitar el sensacionalismo y la cobertura parcial que pueda dañar la privacidad y la presunción de inocencia del acusado. Aun así, los medios han achacado la nueva enmienda a la detención de Rodrigo Rato, ex ministro de economía del PP, por evasión de impuestos y lavado de dinero. La [Asociación Nacional de Informadores Gráficos](#) (ANIGP-TV) y la [Asociación de Prensa de Madrid](#) (APM) han rechazado la medida pues recorta su capacidad de informar.

Con la entrada en vigor de las nuevas leyes, el gobierno del PP no solo ha hecho oídos sordos a las quejas presentadas por la oposición, ONGs y movimientos sociales, sino también a organizaciones internacionales como la ONU. De hecho, un grupo de relatores de esta organización emitió un [comunicado en febrero expresando](#) su preocupación por los cambios legales que “pueden ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España.”

La Comisión Europea debería condenar la nueva ley y las recientes actuaciones del gobierno, pero no es suficiente con criticar las reformas en una rueda de prensa o comunicado. La Unión Europea necesita crear mecanismos para hacer cumplir los estándares de derechos humanos internacionales y Europeos cuando éstos son minados por los estados miembros. Si la base del club democrático del que España es parte son los derechos humanos, la integridad de semejante iniciativa depende de lo rápido que se confronte a quienes rompen las reglas.

Analyses and recommendations offered by the authors do not necessarily reflect those of Freedom House.

RELATED CONTENT

[De las palabras a los hechos en México](#)

January 27, 2015

Por: Elisa López Alvarado, Asociada de Programas, America Latina y el Caribe



[Global Press Freedom: Six Countries to Watch](#)

May 1, 2017

The following countries may be moving toward important changes in their press freedom conditions—for better or worse—in the coming year.

A Worrying Setback for Freedom of Expression in Spain

June 29, 2015

By Ana Pastor,

Researcher, *Freedom in the World and Freedom of the Press*



After Spain's local elections in May, Prime Minister Mariano Rajoy blamed the media for the defeat suffered by his conservative Popular Party (PP), citing their "constant hammering" on corruption cases that have shaken the government in recent years. This inclination to focus on public criticism as a problem in itself, rather than addressing the underlying issues, has also been reflected in the Rajoy government's legislative initiatives.

On July 1, a new [Law on Public Security](#), nicknamed the Gag Law, will enter into force

along with related reforms to the Penal Code. The law imposes sanctions for protest-related offenses, with administrative penalties categorized as mild, grave, and very grave. The mild penalties range from €100 to €600 and will be applied to those who hold protests in public places without first notifying the authorities. Protests held near the parliament and other government buildings can draw fines of €30,000, while penalties for demonstrations adjacent to critical infrastructure like transportation hubs or nuclear power facilities can reach the incredible amount of €600,000. Declining to identify oneself to the authorities, failing to obey orders to disperse, and disseminating unauthorized images of law enforcement personnel also carry penalties of up to €30,000. This last point in particular threatens photojournalists and others who seek to inform the public about any police abuses.

The law effectively limits freedom of expression and freedom of assembly in the name of security. "Protests will be more free because they will be protected from violent people," [explained PP parliament member Conrado Escobar](#).

When the law was first proposed in late 2013, it was known as the Anti-15M Law, a reference to the movement of social protests that began on May 15, 2011. Those protests would have been stymied if the new law had been in place at the time. The movement began spontaneously, when a group of people decided to stay overnight in the Puerta del Sol, Madrid's central square, to protest against austerity measures.

Indeed, the Gag Law is only one in a series of attempts by the government to silence the "indignados," the name given to the Puerta del Sol protesters. In 2012, when the organizations Plataforma En Pie and Coordinadora 25S convened an assembly to "surround" the parliament, the authorities decided to prosecute seven of its organizers. However, Judge Santiago Pedraz backed the protesters and scolded the government for trying to restrict fundamental freedoms. Two other judges later followed suit in similar cases.

In April 2013, as politicians were targeted by protesters facing evictions due to the country's economic crisis, the Rajoy government ordered police to prohibit demonstrations within 300 meters—or three soccer fields—of the homes or offices of public figures. A [senior PP leader denounced the eviction-related demonstrations](#) as a form of harassment that amounted to "pure Nazism" or "a spirit of sectarianism and totalitarianism."

The latest measure against freedom of expression and information took shape earlier this month, when the lower house of parliament approved a PP-backed [amendment to the Law of Criminal Procedure](#) that would restrict the media's use of images of criminal defendants during arrests or transfers. The stated intent was to avoid sensationalism and prejudicial coverage that could harm a defendant's privacy and presumption of innocence. However, media outlets linked the new amendment to the April arrest of Rodrigo Rato, a former PP economy minister, on charges of tax evasion and money laundering. Organizations including the [National Association of Graphic Reporters](#) (ANIGP-TV) and the [Press Association of Madrid](#) (APM) have condemned the amendment as a curb on their ability to inform the public.

In pushing through the recent bills, the PP government has not only turned a blind eye to the complaints presented by the opposition, NGOs, and social movements within Spain, it has also ignored international organizations like the United Nations. A group of [UN special rapporteurs issued a statement](#) in February expressing concern that the legal changes “could be a response by the Government and the legislature to numerous demonstrations that have been carried out in Spain in recent years.”

The European Commission should condemn the new laws, but it is not sufficient to criticize them in a press conference. The EU needs to create mechanisms that can enforce international and European human rights standards when they are undermined by member states. If human rights are the basis of the democratic club to which Spain belongs, the integrity of the whole enterprise depends on swiftly confronting those who break the rules.

Photo Credit: Mariano Rajoy in Vigo. Political meeting of Mariano Rajoy, candidate of the People's Party for the Presidency of the Government of Spain. Vigo (Galicia, Spain). (Flickr/Creative Commons)

Analyses and recommendations offered by the authors do not necessarily reflect those of Freedom House.



[Subscribe](#) [Donate](#) [Events](#) [Contact Us](#) [Careers](#) [Privacy Policy](#)

[Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [RSS Feed](#)

© 2017 Freedom House